

—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—Por enfermedad del Sr. secretario, *Alejo Gomez Elguarte*, oficial mayor.

Es copia. México, Setiembre 22 de 1873.

—*Alejo Gomez Elguarte*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por la S<sup>a</sup> D<sup>a</sup> Jesus Alarcon de Moncada, contra el C. Tesorero Municipal de Cuernavaca, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 15 y 16 de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D<sup>a</sup> Jesus Alarcon de Moncada presentó escrito ante este Juzgado, diciendo: que autorizado por el Ayuntamiento de esta Capital el síndico de la misma corporacion, convino con la S<sup>a</sup> en que cubriría su adeudo, por réditos de un terreno que le fué adjudicado en abonos que ha estado exhibiendo desde Noviembre de 1871, hasta 30 de Agosto último, en que el Tesorero Municipal se negó á recibirlos, y mandó valuar la casa ubicada en el terreno adjudicado, citándola el día nueve del actual para el remate, que se fincó en el C. Nicolás Miranda como único postor, sin atender á las observaciones de la S<sup>a</sup>, negándose á oír al procurador que en el acto y verbalmente nombró y sin que hubieran tenido resultado sus gestiones anteriores; por lo que pide se le ampare en el goce de las garantías que otorgan los artículos 15 y 16 de la Constitucion, que dice fueron violadas con ese procedimiento, pues el Tesorero Municipal, careciendo de jurisdiccion, se erige en Tribunal especial para juzgar, sentenciar y ejecutar á la quejosa, y le infringió una molestia en su domicilio y posesion sin

mandamiento escrito que motivase y fundara la causa legal del procedimiento.

Decretada la suspension del acto reclamado, conforme á la segunda parte del artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869, la autoridad ejecutora informó, que la S<sup>a</sup> Alarcon debía al Ayuntamiento \$ 84,62, por réditos correspondientes á siete años vencidos, de un terreno que pertenecía á los propios de la Municipalidad, y que se adjudicó la S<sup>a</sup>, conforme á la ley de 25 de Junio de 1857; que concedida á los Ayuntamientos la facultad económico-coactiva para el cobro de sus créditos, por el Decreto del Estado de 11 de Junio último, y prevenido que el uso de esa facultad se arregle por la ley de 20 de Noviembre de 1838, la Tesorería Municipal que no había podido conseguir el pago, procedió á embargar y rematar bienes de la S<sup>a</sup> Alarcon, haciéndole las notificaciones respectivas y sin que a S<sup>a</sup> opusiera otra escepcion que la de haber celebrado con el representante del Ayuntamiento un contrato del que no se presenta prueba alguna, y que no surtira efecto; y por último, que sus procedimientos de ninguna manera violan las garantías invocadas, porque no se ha constituido en tribunal especial, ni hubo juicio, ni se ha aplicado ninguna ley privativa; y si es verdad que infringió una molestia á la S<sup>a</sup>, lo hizo en virtud de autoridad competente y previo mandamiento escrito en que se motivó la causa del procedimiento. Por via de justificacion se adjuntó al informe una copia del expediente formado por la Tesorería Municipal, con motivo del cobro de que se trata, y de él aparece: que en 25 de Julio se libró mandamiento de pago á la S<sup>a</sup> Alarcon de Moncada por \$ 76,12 es; que en 29 de Julio se comisionó al C. Felipe Ayala, para que trabara ejecucion en bienes de la S<sup>a</sup>, bastantes á cubrir el adeudo mencionado y los recargos; y hecho el requerimiento, la misma S<sup>a</sup> se opuso al embargo por haber arreglado con la oficina que pagaría en abonos mensuales, y se embargó la casa de su pro-

piedad emplazándola para el remate; que en 18 de Agosto nombró la Tesorería un perito valuador que estimó la casa en \$ 241,93; que en 20 del mismo Agosto se practicó nueva liquidación del adeudo de la S<sup>a</sup>, que arroja por saldo en su contra \$ 84,62 que se publicaron los pregonos para las almonedas y remate, dos veces, por no haberse presentado postores la primera, y en 9 del actual se citó á la S<sup>a</sup> para que concurriera á presenciar el remate que se fincó á favor del O. Nicolás Miranda. El artículo 13 de la Constitución, establece, que en la República nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales; y en concepto del que suscribe, ni puede decirse privativa la ley de 20 de Noviembre de 1838, ni el coactor en el procedimiento de que se trata, puede considerarse como juez. Efectivamente, la citada ley si bien fué expedida con motivo de un impuesto especial, para cuya recaudación extendió hasta llevar á remate los bienes secuestrados, la facultad económico-coactiva concedida antes para el aseguramiento de los intereses fiscales por la ley de 20 de Enero de 1837, mandada observar en la cobranza de créditos de los Ayuntamientos del Estado, según el decreto de 10 de Junio próximo pasado, comprende á todos los deudores de las Municipalidades, es general en su objeto y no puede presumirse que en nuestro caso se aplicara por odio á la quejosa. El coactor, que por otra parte, procede á exigir el pago de adeudo claro ó indudable, no es juez porque nada decide, y porque obrando en los términos de la ley, jamás puede ingerirse en la jurisdicción contenciosa. Puede quizá haber violencia en que el acreedor pueda ejercer sus derechos hasta verificar el pago de propia autoridad; pero mientras no haya excepciones opuestas en forma, no hay materia contenciosa ni existe juicio. En la Federación, la misma ley de 1838 fué mandada observar por el decreto de 11 de Diciembre de 1871, para el cobro de los adeudos fiscales. Podría alegarse también en nues-

tro caso, que opuesto como excepción en el acto del embargo el arreglo celebrado entre el síndico y la S<sup>a</sup>, comprobado por la admisión efectiva de los abonos, la concesión de plazos ó novación de la deuda debía ser sometida al juez ordinario, y aun pudiera hacerse valer además, que el síndico del Ayuntamiento no tuvo intervención en el cobro, que conste al menos en el expediente; pero entonces sería otra la garantía constitucional infringida, y no la del artículo 13, pues ni la autoridad ejecutora hizo declaración alguna respecto de la excepción, ni se constituyó en Juez, ni aplicó tampoco leyes privativas. El artículo 16 invocado también en este recurso, previene: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento"; y la violación de esa garantía se hace consistir, en que la S<sup>a</sup> Alarcon de Moncada no tuvo antecedente del procedimiento coactivo en su contra, hasta que fué citada el día 9 del actual para concurrir al remate de su casa. La autoridad ejecutora asegura en su informe, que en lo particular exitó repetidas veces á la S<sup>a</sup> para que verificase el pago; que le libró el mandamiento respectivo, se entendió la diligencia de embargo con la misma S<sup>a</sup>, y la citó por último para que concurriera al último remate; pero no hay constancia de la persona á que se entregó el mandamiento de que se citara para el nombramiento de perito valuador, ni de que se citara tampoco á la S<sup>a</sup> para las almonedas y para el primer remate, por lo que es necesario esclarecer los hechos relativos y resolver la contradicción que existe entre las aseveraciones de la quejosa y las constancias del informe con justificación. Sin embargo de la prevención que contiene el segundo párrafo del artículo cuarto de la ley de 20 de Enero de 1869, el que suscribe es de opinión, que aun cuando se omita designar en los escritos de queja la garantía constitu-

cional violada en el procedimiento que se reclama, ó haya error en esa designación, deben considerarse todas las garantías, y concederse el amparo, cualquiera que resulte violada; y esa opinion es tanto mas fundada en el caso presente, cuanto que en la S<sup>a</sup>, por razon de su sexo, es excusable la falta de conocimientos legales. En esa virtud entraría desde luego en el examen del procedimiento, respecto á los artículos 14 y 17 de la Constitucion, ademas de los invocados en el escrito de fojas primera; pero tampoco está comprobado que hayan admitido los abonos ni celebrado el convenio, y siendo indispensable en todos casos esclarecer los hechos referidos en aquel escrito,

El Promotor pide, se mande recibir este negocio á prueba por un término comun que no exceda de ocho dias, conforme al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Cuernavaca, Octubre 20 de 1873.—*Nicolás Medina*, una rúbrica.

#### *Alegato del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el recurso de amparo promovido contra el Tesorero del Ayuntamiento de esta Capital por D<sup>a</sup> Jesus Alarcon de Moncada, su estado supuesto, ante V. dice: que su justificacion se ha de servir declarar, que la quejosa ha probado bien y cumplidamente que el procedimiento reclamada viola en su persona las garantías constitucionales, y por consiguiente, que es de concederle el amparo que solicita, protegiéndola en nombre de la Justicia de la Union, contra los procedimientos indicados. Con las declaraciones contestes de los CC. Eleuterio Arámburu y Luis Ruiz, testigos presentados por la S<sup>a</sup> Alarcon y Regidores que fueron en el Ayuntamiento de 1871, se acredita, que autorizado el Síndico de aquella corporación, para contratar el pago en abonos de los rezagos de rentas Mu-

nicipales, celebró un convenio con la quejosa, en virtud del que esta debía dar abonos de doce reales por sus atrasos, y pagar al vencimiento los réditos corrientes del capital que reconocía á censo; y que la S<sup>a</sup> hizo con exactitud esos pagos desde Noviembre de 1871 hasta el mes de Agosto último, agregando, que el Síndico dió cuenta al Ayuntamiento con su convenio, una vez celebrado. Los CC. Clemente Maya, Brígido Dorantes y José Bobadilla, contestes tambien declararon, que la S<sup>a</sup> se mantiene de hacer cigarros, y con tal motivo está fuera de su casa durante el día; que no vive en su compañía su hijo Luis Moncada con quien se entendió la diligencia de embargo, y que durante todo el mes de Julio no se presentaron los agentes municipales á practicar ninguna diligencia en la casa de la S<sup>a</sup>, sino que hasta el 20 de Agosto y sin antecedente, se presentó el C. Marino Sanchez á practicar el avaluo de la casa. Cuando se trata de una imputacion tan grave como la de suplantacion de un expediente suponiendo diligencias que no se practicaron, era necesaria, en concepto del que suscribe, una prueba mas estensa de la que rindió la S<sup>a</sup>, y respecto de la practica del embargo en la forma que aparece en el expediente de la Tesorería, la declaracion de los tres últimos testigos presentados por la S<sup>a</sup> no es bastante para contradecir un instrumento auténtico, ni la aseveracion de las personas que suscribieron esa diligencia, y aun la razon de su dicho que consiste en la vecindad que tienen con la quejosa, y en que está les habria comunicado la practica del embargo, no es enteramente satisfactoria. Sin embargo, está plenamente comprobado por la declaracion de los Sres Arámburu y Ruiz, testigos mayores de toda excepcion y por los recibos de los abonos que presentó la quejosa, que se habia innovado su adeudo, y por el convenio de pagar en abonos y plazos, no se le podia ya exigir coactivamente el pago total de sus rezagos. De la copia del expediente que por via de

justificación adjuntó el C. Tesorero á su informe, no consta ni se hace mención de la persona á quien se entregó el mandamiento de pago, y de ella aparece que no citó á la S<sup>a</sup> para el nombramiento de perito ni para otra diligencia que el último remate, en el que según la declaración de los testigos presenciales CC. Regino Figueroa y Eduardo Hernandez, no se permitió á la S<sup>a</sup> Alarcon ni á su apoderado que hablaran ni se hicieran constar sus protestas. En mi pedimento anterior habia ya manifestado, que en mi concepto, no se violaron con ese procedimiento las garantías invocadas en el escrito de queja; porque ni hubo juicio, y el requisito de la orden escrita para inferir una molestia á la quejosa en su domicilio y posesiones, está cubierto con el mandamiento de pago; y aun faltando este, con la orden de exequendo, y la comisión dada al Sr. Ayala para que procediera el embargo. Ahora, sin embargo de que reitero esa opinión, debo advertir, que el decreto adjunto también al informe y que ostendió la facultad económico-coactiva de los Ayuntamientos del Estado en los términos de la ley de 1838, concede el uso de esa facultad á los Tesoreros y Síndicos, y hay el precedente de que en varios casos, como el de una ejecución contra la hacienda de Atlacomulco, reclamada por D. Ambrosio Fernandez y Osante en un juicio de amparo, cuyas actuaciones existen en el archivo de este Juzgado, han procedido reunidos el Síndico y el Tesorero del Ayuntamiento de esta Capital, y en ese concepto, el C. Tesorero no habría sido competente en nuestro caso para proceder por sí solo. Pero de cualquiera manera, se han violado á mi juicio las garantías que otorgan los artículos 14 y 17 de la Constitución de la República; y aunque no invocadas expresamente en la queja, debe el Juzgado considerarlas, y amparar en su goce á la quejosa. Se ha infringido el artículo 14, porque celebrado el convenio de hacer el pago en los abonos que recibió el mismo C. Tesorero, no estaba en sus atri-

buciones decidir sobre la validez ó subsistencia de ese pacto; y por diversas y repetidas ejecutorias se ha declarado ya, que se viola la garantía que otorga ese artículo siempre que la autoridad administrativa decide en materia contenciosa, y cuando se salva ó omite el recurso, á tribunales en los casos de su competencia. Existente ese convenio, lo que no debía ni podía ocultarse al C. Tesorero, por las constancias de su oficina, habría podido cuando mas proceder contra la S<sup>a</sup> si no verificaba los abonos; pero puntualmente cubiertos esos abonos, debió consultar al Ayuntamiento si no estimaba valedero ese convenio para que este, y no el Tesorero, que no es mas que el depositario de los fondos municipales, ocurriese á los tribunales pidiendo que lo declarase insubsistente; pero procediendo como lo hizo, á ejecutar por sí mismo á la S<sup>a</sup>, era atacar los derechos adquiridos por esta y salvar la necesaria decisión de los tribunales, violando la garantía constitucional. Podría decirse que la S<sup>a</sup> debió oponer como escepcion ese mismo convenio, para que el asunto pasara al conocimiento del Juez; pero la quejosa alega, que no tuvo noticia del embargo, y el mismo hecho de usar del extemporaneo procedimiento coactivo, restringía la libertad de defensa de la S<sup>a</sup>, é importaba la violación de la garantía citada. El artículo 17 de la misma Constitución establece: "Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho;" y aun admitiendo que el C. Tesorero pudiera por sí solo representar al Ayuntamiento, es indudable que ejerció violencia no librando, ó mas bien no entregando el mandamiento de pago á la S<sup>a</sup>, practicando la diligencia de embargo con otra persona, no citándola para el avalúo ni para las almonedas, y por último, no permitiéndole que se defendiera ó que protestara, llevando así hasta una exageración imposible el ya muy odioso procedimiento coactivo. Por todo lo que, el Promotor pide se declare conforme á la petición del principio, que repito para concluir.

Cuernavaca, Noviembre 14 de 1873.—  
*Nicolás Medina*, una rúbrica.

Son copias que certifico Cuernavaca, No-  
viembre 21 de 1873.—*J. Anastasio Rego*,  
secretario.

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Cuernavaca, Noviembre 17 de 1873.—  
Visto este juicio promovido por Doña Jesus  
Alarcon de Moncada, solicitando amparo  
contra los procedimientos del C. Tesorero  
Municipal de esta Ciudad, quien por adeudo  
de ochenta y cuatro pesos sesenta y dos  
centavos, incluidos los recargos, le mandó  
vender su casa, fincando el remate en el C.  
Nicolas Miranda por cantidad de ciento se-  
senta pesos, cuando la finca, segun la quejo-  
sa, vale cuatrocientos; cuyo remate segun  
la misma, fué hecho con tal festinacion, que  
ni procedió embargo ni previa orden de pa-  
go, ni se la citó para las almonedas, ni para  
el mismo remate, pues la única noticia que  
ella tuvo de que se le quería embargar, fué  
el acto de avalúo practicado de orden del  
Tesorero Municipal por el C. Marino San-  
chez, con cuyos actos, dice la Moncada, se  
han violado en su persona las garantías de  
los artículos 13 y 16 de la Constitucion fe-  
deral: Visto el auto de suspension de los  
efectos del remate, que á pedimento de la  
misma se acordó; el informe rendido por el  
expresado funcionario, con el testimonio que  
acompaña de las diligencias practicadas has-  
ta el remate, segun las cuales, nada se omi-  
tió de lo reglamentado para el ejercicio de  
la facultad coactiva prevenida por el Decre-  
to de 20 de Noviembre de 1838, que es la  
ley mandada observar en el Estado por el  
Decreto de su Legislatura de 11 de Enero  
del corriente año, cuya ley, así como la de  
20 de Enero de 1837, está declarada vigen-  
te en toda la República por Decreto del  
Gobierno general de 11 de Diciembre de  
1871, en cuyo artículo segundo se previene  
que se haga constar en los expedientes, de

un modo que no admita duda, que se ha  
notificado al causante cual es la cantidad  
total que se le cobre, para que en el térmi-  
no de tres dias pueda satisfacerla sin recar-  
go de ninguna especie; á lo que se faltó si  
no hubo embargo: Vistas las pruebas rendi-  
das por la quejosa, segun las cuales aparece,  
que no hubo traba de ejecucion ni otras di-  
ligencias que la del avalúo por un solo pe-  
rito y la del remate, suspendido hoy por  
este Juzgado, en cuyo acto dice, que ni á  
ella ni á su apoderado se les quizo oír: Vis-  
tos el pedimento del C. Promotor con su  
alegado y el de la interesada; y resultando  
estar tan contradictorios en sus dichos esta  
y el Tesorero, que este Juzgado tiene que  
prescindir de esa contradiccion y su impor-  
tancia, por no ser de su incumbencia cono-  
cer de ella.

Considerando, en cuanto á la violacion  
de garantías: que el Tesorero Municipal al  
hacer uso de la facultad económico-coac-  
tiva, no se erige en Tribunal especial, por  
lo que con esto no viola el artículo 13 con-  
stitucional; pero si acaso es cierto que omi-  
tió el previo mandamiento de pago, el acto  
mismo del embargo, la citacion á la causan-  
te para los avalúos y nombramiento de pe-  
rito, y la citacion para el remate, desde lue-  
go ejerció violencia para el cobro fiscal, pues  
privó á la interesada de los medios de de-  
fensa que las leyes le conceden, con infrac-  
cion del artículo 17 del Pacto Federal; y  
al aplicar la ley de 20 de Noviembre de  
1838, llegando hasta el remate de la finca  
en menos de la mitad de su valor, se exce-  
dió de sus facultades, por haber nacido un  
punto contencioso al contestar la Señora en  
la diligencia del embargo, si es verdad que  
lo hubo, *que no admitia, esto es, que no  
pasaba por el embargo, en virtud de que es-  
taba arreglada con la Oficina á pagar en  
abonos mensuales*, lo que repitió por segun-  
da y tercera vez (fojas 7 al fin y su vuelta).

Que los recibos que dicha Señora ha pre-  
sentado, justifican ser cierto que se le admi-  
tian esos abonos á los que ella no faltó ni

un solo mes, y el último abono se le recibió aun después de la fecha en que se dice practicado el embargo.

Que esto prueba un convenio verbal, por lo menos, entre la causante y el Síndico del Ayuntamiento, de cuya validez ó insubsistencia debió conocer la autoridad judicial, como lo dispone el artículo tercero de la misma ley de 20 de Noviembre de 1838; pues el citado convenio parece ligaba al Ayuntamiento á estarse á lo convenido por su Síndico, por haber nacido desde la fecha de él, aunque fuese verbal, derechos y obligaciones recíprocas, y por el principio de que, de cualquier modo que conste que uno se quiso obligar quede obligado; mas si su validez era dudosa, el Juez y no el Tesorero debió conocer y decidir sobre ello, á cuya autoridad debió el segundo pasar el expediente ó lo relativo al punto cuestionado, con arreglo á los artículos 13 y 18 de la ley de 20 de Enero de 1837, cuya ley, por ser general y no derogada, sino antes bien declarada vigente, lo está sin duda y debe en sus casos observarse en toda la República.

Que el artículo sexto de la repetida ley de 20 de Noviembre de 1838, concede al ejecutado redimir sus bienes al tiempo del embargo, ofreciendo el pago de su deuda con el aumento del cinco por ciento; y si á la Señora Alarcon en ese acto no se le quiso oír, ni á la persona que llevó para que la patrocinara, se infringió dicho artículo sexto y se ejerció violencia en el cobro, lo que así mismo se ejerció con llegar al remate, indeciso el punto contencioso por la autoridad competente, con lo que se violaron el final del artículo 14 y el miembro segundo del 17 de la Constitución. En atención á lo cual se declara:

Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Jesus Alarcon de Moncada, contra los procedimientos del C. Tesorero Municipal de esta Ciudad, en el cobro del adeudo de aquella con el Municipio, sin que se entienda por esto coartada la facultad de dicho funcionario para

hacer sus cobranzas con arreglo á derecho.

Segundo: Notifíquese el fallo á la intercada, y hágase saber al C. Promotor, previniendo á la primera, reponga con papel del sello tercero el del quinto empleado en este juicio.

Tercero: Publíquese este fallo en la forma acostumbrada y elévense las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Así definitivamente juzgando, lo proveyó y firmó el C. Lic. Mariano Salvadador, Juez interino de Distrito del Estado de Morelos. Doy fé.—*Mariano Salvadador*.—*José Anastasio Rego*, secretario.

Es copia que certifico. Cuernavaca, 19 de Noviembre de 1873.—*José Anastasio Rego*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 29 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por Doña Jesus Alarcon de Moncada contra los actos del C. Tesorero Municipal de Cuernavaca que le mandó rematar una finca de su propiedad para cubrir un adeudo de dicha Señora al mismo Ayuntamiento. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; las pruebas rendidas por la quejosa; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior otorgando el amparo y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente, y Considerando: que aunque de autos consta que la Señora es deudora á las rentas municipales de Cuernavaca, de una cantidad por parte de precio del terreno en que está ubicada la casa que se le mandó sacar á remate, el cobro que se hizo de una manera violenta y sin los requisitos que las leyes previenen, pues aunque por el decreto número 85 de la Legislatura del Estado hace extensiva la facultad económico-coactiva á todos los Ayuntamientos del Estado, esta autorizacion se



debe entender en tales términos que nunca viole las garantías constitucionales; que de autos aparece que el C. Tesorero municipal sin sujetarse al convenio que la Señora probó había celebrado con el ayuntamiento para el pago, usó violencia en el cobro y faltó á los requisitos que las mismas leyes determinan. Por estas consideraciones y con fundamento de la parte conducente de los artículos 14 y 17 de la Constitución general de la República, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á Doña Jesus Alarcon de Moncada contra los procedimientos del Tesorero municipal de Cuernavaca, en el cobro de la cantidad que la Señora adeuda á las rentas municipales.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México Diciembre 4 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. José María de Manero y Embides, contra las resoluciones del Gobierno general, por violacion de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic.

José María de Manero y Embides, Juez segundo suplente del Juzgado de Distrito de este Estado, solicita amparo y proteccion contra disposiciones dictadas por el Supremo Gobierno, que le violan las garantías que le concede el artículo quinto de la Constitución federal, porque esas disposiciones le restringen el derecho que tiene á ser indemnizado de su trabajo personal en todos los negocios y causas de que ha conocido y deba conocer por impedimento legal ó recusacion del Juez propietario y primer suplente, toda vez que solo se acordó el pago de las cuentas de sus derechos devengados en los negocios civiles de que conoció por recusacion de su antecesor en el conocimiento, quedando insolutas las demas que tuvieron su origen de los otros negocios y causas y aun de los juicios de comiso que no deben considerarse sino como civiles, supuesto que las incidencias criminales se deben seguir por cuerda separada como previene el reglamento vigente; alegando tambien en su favor, que no disfrutaban los suplentes sueldo alguno como lo tiene asignado el propietario.

Pedido el informe correspondiente al C. Jefe Superior de Hacienda del Estado, que es el ejecutor de los actos reclamados, lo ha emitido de conformidad con los hechos que se han reclamado en el curso, y á los documentos presentados por los promoventes, que contienen las Órdenes supremas libradas por el Ministerio de Justicia, con motivo del cobro hecho por conducto de la misma Jefatura, faltando solamente hacer constar en autos los términos de la Suprema Circular de 7 de Diciembre de 1870, que puede mandarse agregar en copia.

Evacuado el traslado que del escrito se ha corrido, el infrascrito debe manifestar, que en su concepto la expresada circular y las Órdenes libradas últimamente para el pago de los derechos devengados por el quejoso, no están de acuerdo con la prevencion constitucional del citado artículo quinto, que en lo conducente dice: "Nadie puede